

## RESOLUCION N. 00614

### “POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

#### LA DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

En uso de las facultades legales conferidas por la Ley 99 de 1993, con fundamento en la Ley 1333 de 2009, la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el Acuerdo Distrital 257 del 30 de noviembre de 2006, modificado parcialmente por el Acuerdo Distrital 546 de 2013, el Decreto Distrital 109 del 16 de marzo de 2009 modificado por el Decreto Distrital 175 del 04 de mayo de 2009 y en especial, las delegadas por la Resolución 01865 del 6 de julio de 2021, de la Secretaría Distrital de Ambiente y,

#### CONSIDERANDO

##### I. ANTECEDENTES

Que el día 06 de enero de 2009, la Oficina de Control Ambiental a la Gestión de Residuos de la Secretaría Distrital de Ambiente realizó visita técnica al establecimiento de comercio **MONTALLANTAS Y LUBRICANTES EL RODADERO** identificado con matrícula mercantil No. 01107697, ubicado en la carrera 30 No. 31-11 sur de la localidad de Antonio Nariño de esta ciudad, emitiendo Concepto Técnico No. 1165 del 30 de enero de 2009, en la cual evidenció presunto incumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 1188 de 2003, ni con el Manual de Normas y Procedimiento para la Gestión de Aceites Usados en el Distrito Capital.

Que mediante **Resolución No. 2478 del 18 de marzo de 2009**, la Dirección Legal Ambiental impuso medida preventiva de suspensión de actividades consistente en cese de actividades de cambio de aceites al establecimiento de comercio **MONTALLANTAS Y LUBRICANTES EL RODADERO** identificado con matrícula mercantil No. 01107697, ubicado en la carrera 30 No. 31-11 sur de la localidad de Antonio Nariño de esta ciudad, de propiedad del señor **JUAN AGUSTÍN MARTÍN BEJARANO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.121.621, hasta tanto subsanen las irregularidades señaladas en el Concepto Técnico No. 1165 del 30 de enero de 2009.

Que conforme a las observaciones establecidas en el **Concepto Técnico No. 1165 del día 30 de enero de 2009**, la Dirección de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente mediante **Auto No. 4450 del 30 de junio de 2010** inició procedimiento sancionatorio de carácter ambiental contra el señor **JUAN AGUSTÍN MARTÍN BEJARANO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.121.621, en calidad propietario del establecimiento de comercio **MONTALLANTAS Y LUBRICANTES EL RODADERO**, identificado con matrícula mercantil No. 01107697, ubicado en la carrera 30 No. 31-11 sur, de la localidad de Antonio Nariño de esta ciudad, por presuntamente incumplir con lo dispuesto en la Resolución No. 1188 de 2003, en relación a la gestión de aceites usados y a lo establecido en el Decreto 4741 de 2005 con respecto a residuos peligrosos.

Que la Dirección de Control Ambiental de la Secretaria Distrital de Ambiente mediante **Auto No. 02711 del 22 de diciembre de 2016**, formuló cargos al señor **JUAN AGUSTÍN MARTÍN BEJARANO** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.121.621, en calidad propietario del establecimiento de comercio **MONTALLANTAS Y LUBRICANTES EL RODADERO**, identificado con matrícula mercantil No. 01107697, ubicado en la carrera 30 No. 31-11 sur, de la localidad de Antonio Nariño de esta ciudad, por incumplir presuntamente con lo dispuesto en el literal d) del artículo 5, los literales a), d) y e) del artículo 6 y el literal e) del artículo 7 de la Resolución 1188 de 2003. Adicionalmente por no garantizar el manejo integrado de los residuos o desechos peligrosos que generaba, contraviniendo presuntamente con lo estipulado en los literales a), c), d), e), f), g), h), i), j), y k) del artículo 10 del Decreto 4741 de 2005, hoy compilado en el artículo 2.2.6.1.3.1 del Decreto 1076 de 2015.

## II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que previo a resolver el presente asunto, conviene hacer las siguientes precisiones de orden jurídico:

La situación irregular que dio origen a las presentes diligencias fue conocida por la Secretaria el día 06 de enero de 2009, en la cual se evidenció presunto incumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 1188 de 2003, ni con el Manual de Normas y Procedimiento para la Gestión de Aceites Usados en el Distrito Capital.

A partir de lo expuesto, se hace necesario precisar cuál es el término de caducidad aplicable al presente caso, teniendo en cuenta que los hechos irregulares objeto del proceso ocurrieron antes de la entrada en vigor de la Ley 1333 de 2009. Para tal efecto acudiendo a la norma en comento, se procede al análisis del régimen de transición allí previsto, el cual establece:

**“ARTÍCULO 64. TRANSICIÓN DE PROCEDIMIENTOS.** El procedimiento dispuesto en la presente ley es de ejecución inmediata. Los procesos sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al entrar en vigencia la presente ley, continuarán hasta su culminación con el procedimiento del Decreto 1594 de 1984.”

En este sentido, en materia procesal y de cara a la transición de procedimientos previstos en el artículo 64 de la ley 1333 de 2009, se advierte que, para el presente caso se surtió la etapa de inicio con anterioridad a la entrada en vigor de la ley en mención, razón por la cual se concluye que en el caso bajo examen, es aplicable el procedimiento establecido en dicha normatividad.

En efecto, las normas procesales son de aplicación inmediata, salvo que el Legislador establezca una excepción. Al respecto, el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, dispuso:

**“Artículo 40.** Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.

**Sin embargo**, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, **los términos que hubieren comenzado a correr**, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, **se regirán por las leyes vigentes cuando** se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, **empezaron a correr los términos**, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtir las notificaciones”. (...) (Subrayado y negrillas fuera de texto).

Teniendo en cuenta lo anterior, debe tenerse presente que la naturaleza del hecho irregular que dio lugar al proceso sancionatorio ambiental, es el punto de referencia y de partida para el cómputo de la caducidad, lo cual significa que, por tratarse de un hecho de ejecución instantánea, la caducidad opera desde el mismo momento de su ocurrencia o desde la fecha en que la autoridad ambiental tuvo conocimiento del suceso, tal y como lo ha reafirmado en múltiples pronunciamientos la doctrina y la jurisprudencia.

Así las cosas, y en armonía con lo dispuesto en el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012 que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, se concluye que en el presente caso la Secretaría Distrital de Ambiente conoció por última vez, del hecho irregular el día **06 de enero de 2009**, fecha para la cual no se encontraba vigente la Ley 1333 de 2009, cuyo artículo 10 estableció un término de caducidad de 20 años, en su lugar, regía el **artículo 38 del Decreto 01 de 1984**, que fijo el término de caducidad de la facultad sancionatoria en **tres (3) años**.

En definitiva, al amparo del **DEBIDO PROCESO** y del **PRINCIPIO DE LEGALIDAD** a que se refiere el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012 que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887,

se concluye que si se trata de un hecho de ejecución instantánea o de ejecución continuada cuyo último acto se haya materializado ANTES del 21 de julio de 2009, el término de caducidad comenzó a correr al amparo del artículo 38 del Decreto 01 de 1984 (3 años), como en el sub lite, pues se trata de hechos irregulares acaecidos antes de que entrara en vigencia la caducidad del artículo 10 de la Ley 1333 de 2009, no siendo viable jurídicamente aplicar en forma retroactiva la caducidad de veinte (20 años) prevista en dicha norma.

Aunado a lo anterior, debe considerarse que la caducidad en términos generales, es un fenómeno jurídico de carácter procesal en materia administrativa, que genera la pérdida de competencia de la Administración para resolver sobre un determinado asunto, de suerte que dar aplicación retroactiva a la caducidad de 20 años prevista en la Ley 1333 de 2009 respecto de situaciones que se consumaron antes de su entrada en vigor, implicaría desconocer la máxima del debido proceso constitucional, a cuyo amparo *“nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente”*, y soslayar el principio de legalidad que rige las actuaciones administrativas.

Al respecto, es necesario indicar, que la caducidad de la acción reviste carácter de orden público, pues su establecimiento obedece a razones de interés general que imponen la obligación de obtener en tiempos breves la definición de ciertos derechos, lo que le otorga dinámica a la actividad administrativa, al paso que le imprime un importante grado de seguridad jurídica. Ahora bien, en materia sancionatoria, impide toda posibilidad de iniciar o proseguir una determinada actuación, dado que se trata de una institución procesal que ataca el derecho de acción, cuyo efecto inmediato es la imposibilidad de su ejercicio.

Así entonces, en relación con la disyuntiva que impone analizar si debe o no darse aplicación retroactiva, en el caso que nos ocupa, al término de caducidad de los 20 años previsto en la Ley 1333 de 2009, se deben analizar las disposiciones contenidas en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012; atendiendo las reglas generales de interpretación ante conflictos derivados de la aplicación de la ley procesal en el tiempo, las mismas que permiten concluir que en el presente caso el término de caducidad a aplicar es señalado en el **artículo 38 del Decreto 01 de 1984**.

Que, frente al fenómeno de la caducidad, la H. Corte Constitucional, mediante Sentencia T-433, de la Sala Sexta de Revisión de fecha 24 de junio de 1992, ha dicho:

*“Consiste la caducidad en el fenómeno procesal de declarar extinguida la acción por no incoarse ante la jurisdicción competente dentro del término perentorio establecido por el ordenamiento jurídico para ello. Opera la caducidad ipso jure, vale decir que el juez puede y debe declararla oficiosamente cuando verifique el hecho objetivo de la inactividad del actor en el lapso consagrado en la ley para iniciar la*

*acción. Este plazo no se suspende ni interrumpe, ya que se inspira en razones de orden público, lo cual sí ocurre en tratándose de la prescripción civil, medio éste de extinguir las acciones de esta clase.*

*En este orden de ideas y entendida la caducidad como un término para realizar, un acto administrativo que ponga fin a la actuación sancionatoria, con el objetivo de no dejar en suspenso por mucho tiempo la ejecución del acto de que se trata; de conformidad con lo antes expuesto se procederá al análisis del fenómeno de la caducidad, al amparo del artículo 38 del Decreto 01 de 1984, el cual establece:*

*“Caducidad respecto de las sanciones. ARTÍCULO 38. Salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caducas a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas (...).”*

Igualmente, el Consejo de Estado, reiteró su posición, mediante providencia del 23 de junio de 2000, expediente 9884, Magistrado ponente Dr. Julio E. Correa Restrepo, en el cual precisó:

*“(...) Pues bien, el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, norma aplicable al presente caso, es claro en disponer que, salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caducas a los tres (3) años de producido el acto que puede ocasionarlas, por lo tanto, el término se debe contar a partir del momento en que se produce el hecho infractor. (...)”*

Frente al término establecido en el referido artículo, se han expuesto tres tesis en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, razón por la cual, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., impartió directrices a las entidades y organismos Distritales, a través de la Directiva No. 007 de noviembre 09 de 2007, en la que señaló lo siguiente:

*“(...) Como se observa, han sido diversas las tesis expuestas en relación con el tema objeto de este documento, sin que hasta la fecha se haya generado una única línea jurisprudencial, razón por la cual se hace necesario impartir las siguientes instrucciones en cuanto al término de caducidad de la facultad sancionatoria de la administración: “ (...) \*Teniendo en cuenta que no existe una posición unificada de la Jurisdicción Contencioso Administrativa frente a la interrupción del término de caducidad de la facultad sancionatoria de la administración, y que la administración debe acatar el criterio que desde el punto de vista del análisis judicial genere el menor riesgo al momento de contabilizar dicho término, se recomienda a las entidades Distritales que adelanten actuaciones administrativas tendientes a imponer una sanción, que acojan en dichos procesos la tesis restrictiva expuesta por el Consejo de Estado, es decir, aquella que indica que dentro del término de tres años señalado en la norma en comento, la administración debe expedir el acto principal, notificarlo y agotar la vía gubernativa<sup>6</sup>(...)” (Subrayado fuera de texto).*

Para el caso que nos ocupa, se deduce que esta Secretaría, disponía de un término de **tres (3) años**, contados a partir de la fecha en que tuvo conocimiento de los hechos que dieron lugar a la presente actuación, esto es, desde el día **06 de enero de 2009**, y hasta el día **06 de enero de 2012** para la expedición del Acto Administrativo que resolvería de fondo la Actuación Administrativa frente al proceso sancionatorio, trámite que no se surtió; por lo anterior, de tal modo que operó el fenómeno de la caducidad.

- **Pérdida de Fuerza Ejecutoria**

Que la Dirección Legal de la Secretaría Distrital de ambiente- SDA, con fundamento en el **Concepto Técnico No. 1165 del 30 de enero de 2009**, emitió la **Resolución No. 2478 del 18 de marzo de 2009**, *“Por la cual se impone una medida preventiva y se toman otras determinaciones”*, en el parágrafo del artículo primero precisó:

“(…)

**PARÁGRAFO.** *La medida preventiva de cese de actividades de cambio de aceites, se mantendrá hasta tanto se subsanen las irregularidades señaladas en el concepto técnico No. 1165 del 30 de enero de 2009 y se cumplan en su totalidad las obligaciones de que trata el artículo de la siguiente de esta providencia (...).”*

La citada Resolución fue comunicada el 29 de julio de 2009, al señor **JUAN AGUSTÍN MARTÍN BEJARANO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.121.621, quedando ejecutoria y en firme el día 30 de julio de 2009.

Que una vez revisado el expediente **SDA-08-2009-2893**, se evidencia que no obra pronunciamiento expreso por parte de la Alcaldía Local de Puente Aranda, como tampoco por parte de esta Autoridad Ambiental, en el sentido de dar cumplimiento a lo ordenado en la **Resolución No. 2478 del 18 de marzo de 2009**, respecto de imponer una Medida Preventiva de cese de actividades de cambio de aceites, al establecimiento de comercio **MONTALLANTAS Y LUBRICANTES EL RODADERO**, identificado con matrícula mercantil No. 01107697, ubicado en la carrera 30 No. 31-11 sur, de la localidad de Antonio Nariño de esta ciudad, por lo tanto es necesario ajustarse a las condiciones normativas y declarar la pérdida de fuerza de ejecutoria del acto administrativo que impuso esta medida preventiva.

Ante lo expuesto se hace necesario lo indicado en el Art 91 de la Ley 1437 de 2011:

*“Artículo 91. Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los*

siguientes casos: **“3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos.”** (Subrayado y negrilla fuera de texto original)

A la luz de la citada norma, no estaríamos entonces, bajo la figura del levantamiento de la medida preventiva, sino ante la ocurrencia de la pérdida de fuerza de ejecutoria del acto administrativo, basado en el numeral 3 del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, **“Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos”**.

Así las cosas, para esta instancia del proceso se declara la pérdida de fuerza de ejecutoria de la **Resolución No. 2478 del 18 de marzo de 2009 “Por la cual se impone una medida preventiva y se toman otras determinaciones”**.

### III. PROCEDIMIENTO DE EXPEDIENTES

Se trae a colación, lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso, señala:

*“(...) **ARTÍCULO 116. DESGLOSES.** Los documentos podrán desglosarse del expediente y entregarse a quien los haya presentado, una vez precluida la oportunidad para tacharlos de falsos o desestimada la tacha, todo con sujeción a las siguientes reglas y por orden del juez:*

*(...) 4. En el expediente se dejará una reproducción del documento desglosado.*

Así mismo, el artículo 122 de la misma norma, establece:

*“(...) **ARTÍCULO 122. FORMACIÓN Y ARCHIVO DE LOS EXPEDIENTES.** De cada proceso en curso se formará un expediente, en el que se insertará la demanda, su contestación, y los demás documentos que le correspondan. ...”*

En razón a que la documentación de un expediente constituye una unidad archivística, deberá numerarse consecutiva y cronológicamente de acuerdo con la fecha de la recepción a fin de encontrar un orden coherente.

Las autoridades tendrán el impulso oficioso de los procedimientos en virtud del cumplimiento del principio de celeridad y tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias de conformidad con el principio de eficacia.

La Secretaría Distrital de Ambiente, expidió la Resolución No. 03663 del 26 de diciembre de 2017 **“Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución 686 de 2017, Resolución 2327 de 2015, la Resolución 6681 de 2011 y la Resolución 2306 de 2014 del Sistema Integrado de Gestión de la Secretaría Distrital de Ambiente, y se toman otras determinaciones.”**

El artículo 4 de la citada Resolución dispone:

*“(…) **ARTÍCULO 4.** – Modificar el artículo sexto de la Resolución 686 del 30 de marzo de 2017, en el sentido de derogar la versión 8.0 y adoptar la versión 9.0 del procedimiento que se enuncia a continuación:*

<b>PROCESO</b>	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>VERSION</b>
EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Administración de Expedientes	126PM04-PR53	9.0

Conforme al procedimiento interno con código 126PM04-PR53 versión 9, esta entidad resalta las modificaciones de gestión realizadas, respecto a la aplicación de la siguiente metodología:

*“(…) Establecer las actividades necesarias para el archivo, administración y custodia de los documentos que reciben (radicados externos e internos) y que generan la Dirección de Control Ambiental y sus cuatro subdirecciones (SSFFS, SRHS, SCAAV y SCASP), con destino al archivo de gestión (expedientes administrativos, expedientes permisivos y expedientes sancionatorios), de estas dependencias.”*

*(…) En esta versión el alcance es: El procedimiento inicia con el recibo de la correspondencia en físico que llega asignada a la Dirección de Control Ambiental y sus cuatro subdirecciones (SSFFS, SRHS, SCAAV y SCASP), sea esta de procedencia interna o externa. Y termina con el archivo documental conforme lo establece la TRD, incluida la administración y la custodia de los documentos, hasta la transferencia de la unidad archivística al archivo central.*

*Al ampliar el alcance el producto se amplió y en consecuencia se modificó. En la versión 8 el producto era: Expediente actualizado, administrado y custodiado.”*

Dicho lo anterior, esta entidad cuenta con las herramientas necesarias para organizar los expedientes 08, y los documentos que reposen en los mismos, siendo así que, dado que los inicios de procesos sancionatorios se comprenden desde el recibo de correspondencia, (conceptos técnicos con sus actas de visita o documentos externos), se deberá hacer la gestión necesaria para aperturar los expedientes, garantizar el debido proceso y evitar la duplicidad de investigaciones en una misma carpeta.

Que teniendo en cuenta lo anterior, en el presente acto administrativo la Dirección de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente, procederá a:

- Declarar la caducidad de la facultad sancionatoria ya que disponía hasta el día 06 de enero de 2012 para la expedición del Acto Administrativo que resolvería de fondo la Actuación Administrativa frente al proceso sancionatorio.
- Declarar la pérdida de fuerza de ejecutoria de la **Resolución No. 2478 del 18 de marzo de 2009** y en consecuencia, ordenar el archivo de las diligencias administrativas contenidas en el expediente **SDA-08-2009-2893**.

- Ordenar el desglose de los siguientes documentos, que se encuentran contenidos en el expediente **SDA-08-2009-2893**:

1	Concepto Técnico No. 06605 del 15 de abril de 2010 (Folios 33 al 40)
2	Concepto Técnico No. 17421 del 2 de febrero de 2011 (Folios 50 al 60)
3	Concepto Técnico No. 01629 del 6 de febrero de 2012 (Folios 100 al 106)
4	Concepto Técnico No. 01401 del 21 de abril de 2021 (Folios 199 al 205)

#### IV. COMPETENCIA DE ESTA SECRETARÍA

El artículo 5° del Decreto 109 de 2009, modificado por el Decreto 175 de 2009, en su literal d) asigna a esta Secretaría la función de ejercer la autoridad ambiental en el Distrito Capital, en cumplimiento de las funciones asignadas por el ordenamiento jurídico vigente, a las autoridades competentes en la materia.

De conformidad con lo contemplado en el Numeral 6° del Artículo Segundo de la Resolución 1865 del 6 de julio de 2021, de la Secretaría Distrital de Ambiente, “*Por la cual se reasumen funciones por parte de la Secretaria Distrital de Ambiente, se delegan funciones en la Dirección de Control Ambiental y sus Subdirecciones adscritas y se toman otras determinaciones*” corresponde a la Dirección de Control Ambiental de esta Secretaria “6. Expedir los actos administrativos que declaran la caducidad administrativa en los procesos sancionatorios”.

En mérito de lo expuesto, la Dirección de Control Ambiental,

#### RESUELVE

**ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la caducidad** de la facultad sancionatoria dentro del proceso adelantado por la Dirección de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente contra el señor **JUAN AGUSTÍN MARTÍN BEJARANO** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.121.621, en calidad de propietario del establecimiento de comercio **MONTALLANTAS Y LUBRICANTES EL RODADERO**, identificado con matrícula mercantil No. 01107697, ubicado en la carrera 30 No. 31-11 sur, de la localidad de Antonio Nariño de esta ciudad, de conformidad con la parte motiva del presente acto administrativo.

**ARTICULO SEGUNDO: DECLARAR LA PERDIDA DE FUERZA DE EJECUTORIA**, de la **Resolución No. 2478 del 18 de marzo de 2009**, “*Por la cual se impone una medida preventiva y se toman otras determinaciones*”, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

**ARTÍCULO TERCERO.** - Ordenar al Grupo Interno de Expedientes el **DESGLOSE** de los siguientes documentos, que se encuentran contenidos en el expediente **SDA-08-2009-2893**:

1	Concepto Técnico No. 06605 del 15 de abril de 2010 (Folios 33 al 40)
2	Concepto Técnico No. 17421 del 2 de febrero de 2011 (Folios 50 al 60)
3	Concepto Técnico No. 01629 del 6 de febrero de 2012 (Folios 100 al 106)
4	Concepto Técnico No. 01401 del 21 de abril de 2021 (Folios 199 al 205)

**ARTÍCULO CUARTO.** – Ordenar la apertura de un nuevo expediente con la codificación SANCIONATORIO – 08 a nombre del señor **JUAN AGUSTÍN MARTÍN BEJARANO** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.121.621, en calidad de propietario del establecimiento de comercio **MONTALLANTAS Y LUBRICANTES EL RODADERO**, identificado con matrícula mercantil No. 01107697, e incorporar los documentos señalados en el artículo tercero del presente acto administrativo, para que dentro de este se adelanten las actuaciones administrativas correspondientes de conformidad a lo contemplado en la Ley 1333 de 2009.

**ARTÍCULO QUINTO.** - **Notificar** la presente providencia al señor **JUAN AGUSTÍN MARTÍN BEJARANO** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.121.621, en la carrera 30 No. 31-11 sur, de la localidad de Antonio Nariño de esta ciudad, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 45 del Decreto 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo, en concordancia con el artículo 308 de la ley 1437 de 2011.

**ARTÍCULO SEXTO.** - **Comunicar** la presente Resolución a la Oficina de Control Disciplinario Interno de esta entidad, para lo de su competencia. Se remitirá en consecuencia copia del presente acto administrativo.

**ARTÍCULO SEPTIMO.** - **Publicar** la presente providencia en el boletín que para el efecto disponga la entidad. Lo anterior en cumplimiento del artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

**ARTÍCULO OCTAVO.** - Comunicar la presente Resolución a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.

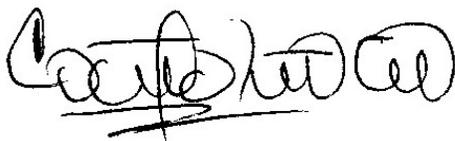
**ARTÍCULO NOVENO.** - Ordenar el archivo definitivo de las diligencias contenidas en el expediente **SDA-08-2009-2893**, como consecuencia de lo previsto en el artículo primero de la presente providencia.

**ARTÍCULO DECIMO.** - Contra la presente resolución procede recurso de reposición el cual se deberá interponer ante la Dirección de Control Ambiental de esta Secretaría, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del presente acto administrativo, de conformidad con lo

establecido en los artículos 50 y 51 del Decreto 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo), en concordancia con el artículo 308 de la ley 1437 de 2011.

**NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE**

fecha



**CAMILO ALEXANDER RINCON ESCOBAR**  
**DIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL**

**Elaboró:**

OLGA LUCIA MORENO PANTOJA                      CPS:      CONTRATO SDA-CPS-20221571 DE 2022      FECHA EJECUCION:      08/03/2022

OLGA LUCIA MORENO PANTOJA                      CPS:      CONTRATO SDA-CPS-20221571 DE 2022      FECHA EJECUCION:      12/03/2022

**Revisó:**

DANIELA URREA RUIZ                              CPS:      CONTRATO SDA-CPS-20220734 DE 2022      FECHA EJECUCION:      15/03/2022

**Aprobó:**

**Firmó:**

CAMILO ALEXANDER RINCON ESCOBAR                      CPS:      FUNCIONARIO      FECHA EJECUCION:      15/03/2022